

Iguala, a un año: ni verdad ni justicia



8

G+1

Hoy se cumple un año de los ataques perpetrados en Iguala en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, con saldo de tres muertos, decenas de heridos de distinta gravedad y 43 desaparecidos, además de otros tres asesinados ajenos a ese plantel. La agresión marcó un hito en las violencias de distintos signos que padece la población del país –la de la delincuencia organizada y la de las acciones represivas en contra de movimientos sociales– y en la creciente incapacidad de las instituciones públicas para preservar la integridad y la vida de los ciudadanos, procurar justicia y hacer frente a la impunidad. Pero la reacción social a tales hechos ha sido también un punto de inflexión en la historia de las movilizaciones populares recientes y en el curso de estos 12 meses se ha derrumbado la imagen interna y externa del régimen.

Cabe recordar que las primeras indagatorias señalaron como responsables a una organización local dedicada al narcotráfico y al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien cuatro días después pidió licencia al cargo y se dio a la fuga junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Al día siguiente el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por primera vez sobre los incidentes de Iguala, señalando que la responsabilidad de esclarecer los crímenes correspondía al gobierno estatal, encabezado entonces por Ángel Aguirre Rivero.

Las tareas de búsqueda de los muchachos normalistas, infructuosas hasta la fecha, dieron pie al descubrimiento de innumerables fosas clandestinas en la región, y permitieron sacar a la luz en toda su crudeza el fenómeno recurrente y constante de las desapariciones en Guerrero, como una expresión particularmente aguda de una práctica criminal que tiene lugar en todo el país.

La atrocidad generó una movilización social y popular sin precedentes en solidaridad con las víctimas de la agresión, en exigencia de la presentación de los jóvenes desaparecidos y en demanda de un esclarecimiento pleno de los hechos y de la identificación de los responsables.

Como resultado de esa intensa presión, el 4 de octubre la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que atraería la investigación del caso.

Jesús Murillo Karam, quien ocupaba la titularidad de esa dependencia, presentó el 7 de noviembre una serie de conclusiones parciales según las cuales los 43 normalistas habían sido capturados por policías municipales y entregados al *cártel* conocido como *Guerreros Unidos*, cuyos integrantes los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula. La responsabilidad intelectual de todo ello recaía, según Murillo Karam, en Abarca y Pineda, quienes ya habían sido capturados en Iztapalapa, en una acción que –como todas en este caso– generó suspicacias de la sociedad.

Para entonces las movilizaciones se habían extendido a localidades pequeñas, medianas y grandes del país, e incluso a múltiples ciudades del extranjero. El 27 de enero de este año Murillo Karam realizó una nueva presentación que cambiaba el móvil del crimen: el ex alcalde ya no ocupaba, en ese segundo relato, el papel protagónico: la agresión se habría originado porque los integrantes de *Guerreros Unidos* habrían confundido a los normalistas con miembros de una facción rival; la autoridad mantuvo la narración de la incineración en el basurero y todo ello fue proclamado “verdad histórica”.

En todo ese tiempo el gobierno dio crédito a los presuntos culpables materiales y desechó los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, quienes han sostenido desde un inicio que en la agresión participaron elementos de las policías estatal y federal así como integrantes del Ejército. Tanto los normalistas como los familiares de los desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos que les han dado apoyo afirman, con base en elementos que constan en la averiguación, que lo ocurrido en Iguala fue un crimen de Estado en el que participaron miembros de los tres niveles de gobierno. Por otra parte, tanto científicos de la UNAM como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) aportaron datos que hacen insostenible la versión oficial de la quema de cuerpos en Cocula.

Los cuestionamientos a la narración oficial de los hechos fueron sistematizados en forma exhaustiva por el informe que presentó hace tres semanas el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ese documento enlista, además, numerosas omisiones, irregularidades, ocultamientos e inconsistencias en la investigación de la PGR, niega en forma contundente la posibilidad de la incineración y aporta elementos nuevos no considerados o no encontrados por los investigadores oficiales. Por añadidura, el informe del GIEI formula recomendaciones al gobierno mexicano que son coincidentes con las demandas que familiares, compañeros y asesores de los asesinados, heridos y desaparecidos han enarbolado desde hace un año.

La reunión sostenida entre los familiares y compañeros de los jóvenes desaparecidos y Peña Nieto en vísperas de este aniversario fue emblemática de la incapacidad oficial de dar respuesta a las demandas de esclarecimiento, justicia y trato digno. El Presidente rechazó las ocho peticiones puestas sobre la mesa por su contraparte y, tras el encuentro, los padres manifestaron su decepción por la negativa a asumir cualquier compromiso sustantivo que permita recuperar la confianza en una procuraduría que, expresaron, los ha engañado de manera reiterada. La reunión se saldó, pues, con un nuevo fracaso de las autoridades en su búsqueda de credibilidad y en una nueva frustración para los de Ayotzinapa.

En suma, en el curso de este año se ha hecho evidente la incapacidad de las instituciones para investigar, esclarecer y resolver actos tan atroces como el de Iguala, su falta de flexibilidad y sensibilidad y su carencia de voluntad política para hacer frente a la impunidad que campea en el país. Por el contrario, las acciones oficiales parecen una simulación a ojos de muchos y se traducen en ofensas adicionales al agravio inicial. Conforme el régimen se enreda en una crisis política cada vez más aguda, la sociedad mantiene vigente y multiplicada la exigencia de verdad y justicia.

Los comentarios para este tema se han cerrado.



5 Comentarios

La Jornada Impresa

Iniciar sesión ▾

Recomendar

Compartir

ordenar por el mejor ▾



rumbambiro · hace 24 días

los primeros culpables son los padres por no haber hecho nada cuando los hijos andaba delinquiendo en ves de estar estudiando

1 ^ | v · Compartir >



rumbambiro · hace 24 días

Como hay gente frustrada

^ | v · Compartir >



Josefo Daniel · hace 24 días

¡FUE EL ESTADO!. A un año de distancia, y desde los primeros días de haberse perpetrado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, nada hay que agregar, solo más tiempo. Todas investigaciones que se han realizado conducen al criminal. Enrique Peña Nieto lo sabe, ÉL ES EL ÚNICO RESPONSABLE Y FACULTADO PARA DECIR LA VERDAD, PERO CALLA por intereses oscuros que lo tienen atado de manos. El juego ha terminado y no tiene más argumentos más que el de la voluntad y la decisión de DECIR LA VERDAD, ¡LA ÚNICA VERDAD!. LO ESTAMOS ESPERANDO... ¡NO MÁS DISCURSOS DESGASTADOS!, ¡Vivos se los llevaron, VIVOS LOS QUEREMOS!

^ | v · Compartir >



Humanovor · hace 24 días

¿Tan poderosos son los autores intelectuales del crimen de lesa humanidad perpetrado?, ¿Quiénes son?

^ | v · Compartir >

**Aprendiz** · hace 25 días

La realidad a un año de Ayotzinapa

Aprendiz (5:45)

La entente gobierno–políticos, militares–policías, y empresarios–inversionistas, que hoy podemos representar en los nombres de Peña Nieto, Cienfuegos, y Claudio X. González, son los autores intelectuales del crimen cometido en Iguala, del mismo modo que lo son de la mayoría de los grandes crímenes cometidos en todo el país; la delincuencia “organizada” sólo fue el brazo ejecutor de lo planeado por la cúpula del Estado.

Tras estos están capos mafiosos como Salinas de Gortari, y los intereses de Estados Unidos y el capital financiero internacional. No olvidemos que la delincuencia de alto rendimiento siempre fue negocio de los grandes capitales financieros y los Estados.

El eje Ayotzinapa–Guerrero, Autodefensas–Michoacán, y CNTE–Oaxaca forma parte del plan Puebla–Panamá, luego renombrado

[ver más](#)[^](#) | [v](#) · [Compartir](#) ›

TAMBIÉN EN LA JORNADA IMPRESA

[¿QUE ES ESTO?](#)

La Jornada: Tropas de EU irrumpen en hospital de MSF ...

2 comentarios · hace 14 horas

Carlos Decourcy Lascoutx — otro chorizo servido por nuestro mesero, Libélula.

La Jornada: Destinará Morena la mitad de sus prerrogativas a ...

20 comentarios · hace 14 horas

GUSTAVO GARCIA — POR ESO LE TIENEN TERROR A AMLO LOS AMOS DEL PAIS. ...

La Jornada: Ayer, inusitada demanda de dólares en el ...

1 comentario · hace 14 horas

riftcliff — Venta de 200 milloncejos sin precio minimo...excelente estrategia ...

La Jornada: Ex agente secreto de la dictadura chilena es ...

1 comentario · hace 14 horas

riftcliff — 5 entre 50 igual a 0.1 una decima de año por cabron izquierdista neutralizado y ...

[✉ Suscribirse](#)[D Agrega Disqus a tu sitio](#)[🔒 Privacidad](#)

Copyright © 1996-2013 DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.
Todos los Derechos Reservados.
Derechos de Autor 04-2005-011817321500-203.